**Intervención del Sr. Carlos Roverssi Rojas
Ministro de Comunicación y Enlace Institucional
Presidencia de la República de Costa Rica**

**Primera reunión de seguimiento de la Carta de San José sobre los
derechos de las personas mayores en América Latina y el Caribe**

**Sede Hotel San José Palacio
San José, Costa Rica, 4 de julio de 2013, 9:00 horas**

En nombre de Costa Rica le extiendo a todas y todos ustedes un cordial y afectuoso saludo.

57 millones de personas conforman actualmente el grupo poblacional de personas mayores en Latinoamérica y el Caribe, situación que se constituye en un proceso creciente, progresivo e irreversible del envejecimiento.

En nuestra región, envejecemos al mismo tiempo que nos estamos desarrollando; razón por la cual se hace necesario realizar ajustes en la oferta de bienes y servicios existentes, para responder a las demandas generadas por las características de esta realidad.

Las personas mayores se encuentran en desigualdad sustantiva respecto al goce de los derechos humanos; son vulnerables en mayor medida que otros grupos de edad, a violaciones específicas de sus derechos fundamentales, condición que incide en la necesidad de que se procure una atención especial de los estados, organismos internacionales y de la sociedad civil en su conjunto.

El año anterior, Costa Rica fue la sede para la tercera Conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento en América Latina y el Caribe que se celebró del 8 al 11 de mayo de 2012. Este evento, cuyo tema central fue "envejecimiento, solidaridad y protección social: la hora de avanzar hacia la igualdad", congregó a 420 personas, entre delegados de los Estados miembros de la CEPAL, representantes de organismos internacionales, expertos en temas de población y organizaciones de la sociedad civil, con el fin de analizar el cumplimiento de los compromisos contraídos por los países de la región en la Declaración de Brasilia, adoptada en 2007, durante la segunda Conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento.

Asimismo se estudiaron las perspectivas futuras del envejecimiento poblacional y su inclusión en la agenda pública, se identificaron las acciones clave a implementar durante los próximos cinco años, específicamente aquellas que refuerzan las capacidades nacionales para responder a los principales desafíos y temas emergentes en relación con las personas mayores.

A lo largo de las deliberaciones se hizo hincapié en la "igualdad" en el contexto del envejecimiento como un valor básico, al tiempo que se insistió en la necesidad de establecer una hoja de ruta para promover la igualdad en todas las edades.

Uno de los resultados más destacados y significativos de la Conferencia fue la manifestación de las y los representantes de los países Latinoamericanos y caribeños al aprobar, por unanimidad, la Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores de América Latina y el Caribe, en donde reafirmamos nuestro compromiso de no escatimar esfuerzos para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las

personas mayores, así como la férrea e ineludible voluntad de trabajar en la erradicación de todas las formas de discriminación y violencia, y de crear redes de protección de las personas de edad para hacer efectivos sus derechos.

En la Carta nos comprometimos a:

- Avanzar hacia un Estado proactivo, que asuma un rol protagónico y dinámico con un doble objetivo. Por una parte, prevenir los efectos del rápido envejecimiento de la población en los sistemas de protección social y, por otra, introducir nuevos dispositivos que permitan incrementar su cobertura y calidad para atender las necesidades de las personas durante toda la vida.
- Superar la desigualdad que reproducen los sistemas de protección social y que afectan a los grupos más desprotegidos, como lo son las mujeres mayores, las personas mayores rurales, así como las personas mayores indígenas. Debemos superar las inequidades que se originan desde tempranas edades y que luego se traducen en desventajas y limitaciones para vivir una vejez digna.
- Avanzar hacia el reconocimiento y la inclusión del cuidado en las políticas públicas. Buscamos fortalecer la autonomía de las personas mayores. Para ello, tenemos que abordar la dependencia y el cuidado como un asunto de responsabilidad colectiva, que debe ser sostenido mediante prestaciones y servicios que maximicen la independencia de las personas mayores y el bienestar de las familias.
- Fortalecer las capacidades nacionales para hacer efectivos los derechos de las personas mayores. Ello conlleva el cumplimiento de las leyes, el desarrollo de institucionalidad pública, la dotación de

recursos humanos, un adecuado presupuesto, la participación efectiva de las personas mayores, entre otros aspectos.

En la Carta, los representantes gubernamentales reafirmamos el compromiso expresado en la Declaración de Brasilia de trabajar por la erradicación de todas las formas de discriminación y violencia. Además, nos comprometimos a reforzar la protección de los derechos humanos garantizando el acceso a la justicia y brindando un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos.

Respaldamos la labor del Grupo de Trabajo de composición abierta sobre el envejecimiento de las Naciones Unidas y el Grupo de Trabajo sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores de la OEA, así como la designación de un relator especial encargado de velar por la promoción y protección de los derechos humanos de este colectivo en el ámbito del Consejo de Derechos Humanos.

Por lo anterior, la Carta de San José, se convierte en un instrumento avanzado sobre los derechos de las personas mayores. Asimismo rige el quehacer de los Estados de América Latina y el Caribe para los próximos años y contribuyó para el examen global del Plan de Acción Internacional de Madrid.

Como todas y todos conocemos, el envejecimiento de la población es uno de los temas prioritarios del desarrollo social de este siglo.

En este sentido, somos conscientes que la importancia del reconocimiento y la vigilancia de los derechos de las personas mayores deben verse como un justo reconocimiento a su sola presencia en nuestra sociedad.

Desde esa perspectiva, nuestro objetivo debe consistir en promover espacios de diálogo participativo y de propuestas para lograr que las “voces” de las personas mayores sean escuchadas.

En nuestra región tenemos enormes desafíos vinculados a los asuntos del envejecimiento y las personas mayores. Se trata de un fenómeno demográfico sin precedentes y debemos prepararnos.

Hoy, no solo hay más personas mayores en nuestra región, sino que también viven más. En promedio para ambos sexos, la esperanza de vida al nacer alcanzará los 75 años en el 2015. Tal como ocurre en la actualidad, en las próximas décadas habrá más mujeres mayores que hombres, inclusive en las edades más avanzadas, por lo que constituyen un grupo de especial interés para nuestros gobiernos.

En nuestra región tenemos tres desafíos de suma importancia en relación a este tema.

- El primero es que envejecemos al mismo tiempo que nos estamos desarrollando. Después de varios años de crecimiento económico, baja inflación, batalla contra la pobreza, creación de empleo y avances democráticos, en nuestra región emerge la necesidad de consolidar lo avanzado y cerrar las brechas sociales y productivas para un cambio estructural que incluya y beneficie a todos, en especial a aquellos tradicionalmente excluidos (CEPAL, 2012).
- El segundo es que el envejecimiento no es ajeno a la desigualdad histórica que nos afecta. De acuerdo con las últimas estadísticas disponibles para 18 países, en promedio el 10% más rico de la población latinoamericana recibe el 32% de los ingresos totales. Mientras que el 40% más pobre recibe solo el 15% (CEPAL, 2012).

- Y el tercero, derivado de lo anterior, es armonizar los derechos de la generación que construyó nuestros países con el desarrollo de las potencialidades de la generación que construirá nuestro futuro.

En este marco, una de las grandes contribuciones del Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento, Madrid 2002 y su seguimiento regional impulsado por la CEPAL es precisamente el movilizar a distintos actores en pos de un itinerario compartido para trabajar en hacer frente, de manera progresiva, a estos desafíos.

Sin duda, tenemos preocupaciones urgentes. En nuestra región, todavía muchas personas mayores no tienen acceso a pensiones de vejez que les garanticen la protección frente a los riesgos de pérdida de ingresos. Con frecuencia, las personas mayores no cuentan con los servicios de salud oportunos y de calidad; y las nuevas necesidades de asistencia – surgidas a partir de factores demográficos, sociales y de salud – resultan en una institución familiar con demandas excesivas en un contexto inequitativo en términos de distribución sexual del trabajo de cuidado.

Este panorama, sin duda, no es igual en todos los países de la región. Somos diversos en términos de desarrollo, tamaños de las sociedades, consolidación institucional y cultura, pero nos une el anhelo común de construir un futuro mejor, y en busca de ello, hemos realizado notables avances en los últimos diez años.

Estamos incorporando los asuntos de las personas mayores en las políticas públicas. 17 países cuentan con una política nacional de envejecimiento y vejez, y 13 han legislado para proteger sus derechos. Gran parte de los países de la región ha integrado un organismo a

cargo de los asuntos de las personas mayores en el organigrama del aparato público y todos hacen esfuerzos por lograr mayores recursos financieros y ampliar la cobertura y calidad de sus acciones. En 15 países, estas instituciones se originan a partir de la adopción del Plan Madrid y su seguimiento regional.

Otro logro relevante a partir de 2002, es la decisión de ampliar el acceso a la seguridad social por medio de la creación de programas de pensiones no contributivas para las personas mayores en países con envejecimiento incipiente y bajas coberturas de protección social. A pesar de la crisis de 2008, países como el Estado Plurinacional de Bolivia, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, la República Bolivariana de Venezuela, en otros, pusieron en marcha pensiones para personas mayores y buscan reafirmar así su compromiso por brindar mayor bienestar a este sector de población.

En salud, uno de los avances más sobresalientes ocurre en el ámbito de la institucionalidad pública, puesto que la mayoría de los países han creado programas de salud para personas mayores dentro de los ministerios o las secretarías respectivas, y varios han avanzado en la incorporación de las personas mayores en los planes y programas de salud o creado seguros específicos para cubrir los riesgos asociados a la edad de vejez.

Los servicios sociales es un área que empieza a desarrollarse en nuestra región, y son los países del Caribe de habla inglesa donde existe mayor experiencia en la materia. No obstante, la dispersión de iniciativas, la disparidad de coberturas y servicios ofrecidos, es un área que está llamando cada vez más fuerte la atención de los gobiernos.

Otro tema que quisiera destacar es el de la participación de las personas mayores. Es notable como en los últimos años ha ido creciendo la organización de este grupo social, venciendo obstáculos de todo tipo para llegar a constituirse en interlocutores de los asuntos que les afectan. Quiero expresar mi reconocimiento y valoración de estas organizaciones, las cuales por cierto están siendo incorporadas cada vez con mayor frecuencia en la elaboración de políticas en su favor y las cuales tuvieron un espacio especial en nuestra Conferencia regional.

Pero quizás, uno de los logros más relevantes de estos diez años ocurre en otro ámbito, el de cambio de paradigma.

Efectivamente, durante esta última década hemos trabajado en la región por abandonar la visión paternalista y protectora de las personas mayores, y trabajar conjuntamente con ellas para fortalecer su autonomía y reconocerles derechos. Esta convicción la hemos compartido con el resto de la comunidad internacional y promovimos la constitución del Grupo de Trabajo sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en la Organización de Estados Americanos y del Grupo de trabajo de composición abierta sobre el envejecimiento en las Naciones Unidas. De manera más reciente, impulsamos - por iniciativa primero de El Salvador y luego de otros 17 países de la región - la aprobación de la resolución titulada *“Hacia un instrumento jurídico internacional amplio e integral para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas de edad”* en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre recién pasado.

Hoy podemos asegurar que hemos recorrido una parte importante del camino trazado en Brasilia en 2007, aunque sin lugar a dudas esto es solo el punto de partida para prepararnos y superar los desafíos

económicos, sociales y culturales que derivan del cambio demográfico en curso. Con este propósito, en la tercera Conferencia regional sobre envejecimiento en América Latina y el Caribe, trabajamos prolijamente por arribar a un nuevo consenso regional que nos ayude a superar las limitaciones y dificultades que se nos presentan.

Consideramos indispensable concienciar que el envejecimiento de la población no es un asunto circunscrito únicamente a las actuales generaciones de personas mayores. La prioridad que se le otorgue a este tema y los recursos que se asignen en los presupuestos nacionales será reflejo de la sociedad que queremos.

Nuestro gran anhelo es construir sociedades más cohesionadas, más democráticas y fundamentalmente más solidarias e inclusivas, donde todos tengamos cabida y seamos respetados.

Para avanzar en esta senda, hoy estamos cumpliendo con el compromiso asumido, por nuestro país, para realizar –con el apoyo técnico de la CEPAL– esta primera Reunión de seguimiento de la Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores en América Latina y el Caribe.

Es nuestro interés continuar avanzando, sumando esfuerzos y generar acuerdos y estrategias con el fin de propiciar y apoyar las acciones para garantizar el mejoramiento en el nivel y la calidad de vida de las personas mayores.

El reto consiste en lograr un trabajo sinérgico, solidario y coordinado entre el sector público, privado y la sociedad civil para promover una imagen positiva de la vejez y fomentar la creación de un entorno propicio y favorable para las personas mayores como componente de su bienestar. Así como garantizar el cumplimiento de sus derechos con

igualdad y sin discriminación con acciones que promuevan una vida autónoma en la vejez.

Nuestro compromiso es trabajar con ímpetu a favor de las personas mayores y con las personas mayores.

Muchas gracias